

Estos informes están en forma de borrador, ya que son un trabajo en progreso. Si desea citarlos, por favor contacte con el equipo de WIEGO en: laura.alfers@wiego.org

#8 Respuestas de Protección Social a Covid-19

Medidas para hacer frente a la violencia de género en medio de la pandemia mundial

Introducción

La pandemia del Covid-19 representa una crisis tanto sanitaria como económica, pero también ha creado muchos otros desafíos para los países relacionados con el estricto y prolongado período de bloqueo y sus secuelas. Uno de los más preocupantes es el aumento global de la violencia de género, también conocido como [la "pandemia en la sombra" de COVID por la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka](#). Si bien se reconoce ampliamente que el hogar es el lugar donde se produce esa violencia, es importante recordar que las mujeres son igualmente vulnerables al acoso y la violencia en el lugar de trabajo y en otros espacios públicos. Este es especialmente el caso de las mujeres que trabajan en el sector informal, que carecen de la seguridad de un lugar de trabajo formal y sus instalaciones (como baños y seguridad), la condición social que ofrece ese trabajo formal (incluidos salarios y condiciones de vida decentes) y permanecen desprotegidas por la legislación laboral.

Según las estimaciones de ONU Mujeres, a nivel mundial, el 35% de las mujeres han experimentado alguna vez violencia física y/o sexual por parte de su pareja íntima, o violencia sexual por parte de una persona que no es su pareja, y, en promedio, 137 mujeres son asesinadas cada día por un miembro de su propia familia. La violencia de género puede ocurrir [a lo largo del curso de la vida y puede exacerbarse en la vejez](#). Durante la pandemia, el problema empeoró mucho, ya que las medidas de encierro crearon tensión y tensión en muchos hogares agobiados por preocupaciones de seguridad, salud y dinero, al tiempo que aumentaron el aislamiento de las mujeres con parejas violentas, separándolas de las comunidades y los recursos que mejor podrían brindarles apoyo.

Como resultado, las llamadas a las líneas de ayuda se quintuplicaron en algunos países, ya que las tasas de violencia de la pareja íntima denunciadas aumentaron durante este período, también según ONU Mujeres. En el [Reino Unido los asesinatos por abuso doméstico se triplicaron en medio del encierro de Covid-19 entre el 23 de marzo y el 12 de abril](#), en comparación con la media de los últimos diez años. En Sudáfrica, la violencia contra las mujeres se disparó desde el momento en que comenzaron los cierres, con la [línea directa de violencia de género que recibe 2.300 llamadas en los primeros cinco días](#) – casi tres veces la tasa antes del cierre. [Un breve estudio etnográfico con personas trabajadoras domésticas en la India](#) ha encontrado "una mayor incidencia de ambientes abusivos en sus respectivos hogares y [los encuestados] buscaban desesperadamente volver al trabajo a pesar del riesgo de infectarse o de violar las restricciones de encierro impuestas."

Y no se ha dado un respiro a estos niveles crecientes de violencia de género para las mujeres en el lugar de trabajo, donde los desequilibrios de poder son más pronunciados para las trabajadoras del sector informal debido a su género, su situación en el empleo y su lugar de trabajo.

Si bien el acoso y la amenaza de violencia en el lugar de trabajo es una preocupación constante para las personas trabajadoras de la economía informal, las condiciones de COVID-19 han aumentado, de hecho, su vulnerabilidad, especialmente las que trabajan como comerciantes ambulantes y las trabajadoras a domicilio y domésticas. Las personas trabajadoras domésticas suelen experimentar diversas formas de violencia de género en los hogares de sus empleadores debido a las relaciones de poder desiguales que caracterizan su relación laboral. Igualmente, este reconocimiento es importante para los trabajadores a domicilio que pueden sufrir violencia en sus hogares por parte de miembros del hogar y hombres de mediana edad.¹

Las condiciones de COVID han aumentado el aislamiento de ambas categorías de trabajadores, lo que aumenta su vulnerabilidad a esos abusos.

En condiciones de aislamiento, los comerciantes ambulantes y los trabajadores domésticos que van y vienen del trabajo han estado expuestos a la violencia de las autoridades públicas debido a los toques de queda.

Afiliada a StreetNet International, la Cámara de Asociaciones de la Economía Informal de Zimbabwe (ZCIEA) en Zimbabwe, informa de que los gobiernos locales han utilizado el bloqueo y las restricciones concomitantes de COVID para "despejar los mercados" y los espacios de comercio informal por motivos de seguridad e higiene, con la policía acosando y a veces infligiendo violencia a los comerciantes en el proceso. Amenazas similares han sido experimentadas por los recicladores que también operan en espacios públicos muy visibles, como calles residenciales y vertederos.

Varias de las filiales africanas del SNI informan también de que la reapertura gradual del comercio y el transporte ha supuesto más comprobaciones de la documentación, así como retrasos y bloqueos en los puntos fronterizos de distrito, federales y nacionales. Para las mujeres comerciantes transfronterizas en particular, esto ha significado una vulnerabilidad al acoso o la violencia (en forma de detención, violación, confiscación de bienes o extorsión financiera) por parte de la policía y los funcionarios de fronteras. Las personas trabajadoras de la economía informal que son migrantes se enfrentan a problemas similares, y para los que están indocumentados, su condición de inmigrantes crea un obstáculo más para denunciar los abusos y buscar ayuda.

En todo el mundo los desalojos de los lugares de trabajo o del hogar han sido una realidad para los más vulnerables, incluidos muchas personas trabajadoras del sector informal, dejando a las

¹ WIEGO, 'Violence and Informal Work', WIEGO Briefing note Noviembre 2020, p. 4, <https://www.wiego.org/publications/wiego-briefing-note-violence-work>

familias y a las mujeres en particular, desprotegidas y en la calle, donde la amenaza de violencia de los elementos criminales o el acoso policial están siempre presentes.

Lo que está claro es que "el Covid-19, y las incertidumbres en torno a la duración de esta pandemia, requieren intervenciones en múltiples frentes, tanto a corto como a largo plazo, en la esfera pública y privada, para abordar las vulnerabilidades específicas, múltiples e intersectoriales a las que se enfrentan las mujeres", subraya Mercy Brown-Luthango, escribiendo para la revista *Amandla*².

En el presente informe se examinan tres países, Indonesia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, que han respondido a esta pandemia sombría de violencia de género en el hogar y en el lugar de trabajo de manera oportuna e innovadora, explorando qué elementos de su enfoque podrían ofrecer lecciones de buenas prácticas para otros países, y dónde se han quedado cortos. También nos referimos a varias otras medidas más pequeñas de otros países que tienen que abordar la cuestión de la violencia de género en medio de la pandemia.

De este análisis se desprenden varios factores clave. Ha sido importante contar con una estrategia coherente y coordinada para mantener los servicios de violencia de género y, al mismo tiempo, mantener a salvo a los supervivientes y a los proveedores de servicios. Esto es algo que tanto Indonesia como Nueva Zelanda han acertado, con la introducción de protocolos nacionales, y los esfuerzos por asegurar que los proveedores de servicios contra la violencia de género se clasifiquen como trabajadores esenciales. En muchos otros países, entre ellos Sudáfrica, se han hecho esfuerzos concertados para iniciar, ampliar y fortalecer los canales existentes para denunciar los abusos y solicitar asistencia en condiciones de encierro, incluidas las líneas telefónicas de ayuda, los mensajes de texto y las charlas en línea.

Cuando se trata de hacer frente a la violencia de género, los recursos son esenciales, pero en consecuencia, es necesario dirigirlos eficazmente. El compromiso de Nueva Zelanda con la violencia de género se refleja en sus asignaciones presupuestarias, mientras que Indonesia ofrece un ejemplo de un país que ha podido establecer asociaciones con organismos internacionales de desarrollo en iniciativas conjuntas, a fin de aprovechar los recursos.

A pesar de estas importantes medidas, las políticas y la legislación de Indonesia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, al igual que la mayoría de los países del mundo, no reconocen ni abordan adecuadamente la violencia y el acoso en el lugar de trabajo como componente central de la lucha contra la violencia de género. Toda estrategia coordinada, amplia y a largo plazo para hacer frente a la violencia de género debe abordar la marginación económica y la explotación de la mujer, que afianza su dependencia económica de los hombres³. El protocolo nacional de Indonesia ha intentado hacerlo, así como el Plan Estratégico Nacional de Sudáfrica sobre la violencia de género y el femicidio 2020-2030. Sin embargo, ni Indonesia ni Sudáfrica han respaldado este compromiso ratificando la [Convención de la OIT sobre la Violencia y el Acoso](#)

² ['South Africa's 2nd Pandemic: reflecting on gender-based violence during and beyond COVID-19'](#)
Amandla 71/72 Septiembre 2020,

³ 'La segunda pandemia de Sudáfrica'

[y la Recomendación \(No. 206\)](#), que pide un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia y el acoso de género.

La violencia, basada en roles de género profundamente arraigados en la familia, el lugar de trabajo y la sociedad, es una forma de disciplinar y controlar el trabajo de la mujer, tanto dentro como fuera del hogar. Por lo tanto, los debates sobre la violencia en el hogar no pueden separarse de la violencia en el mundo del trabajo y en la esfera pública en general, ya que ambos tienen por objeto suprimir y controlar la movilidad, la sexualidad y el acceso de la mujer a los recursos.⁴

Poner en marcha los protocolos nacionales

La existencia de orientación y protocolos adecuados para las víctimas, los cuidadores y otros profesionales que se ocupan de la violencia contra la mujer es fundamental para lograr respuestas más eficaces sobre el terreno, especialmente en un momento en que la pandemia podría traer incertidumbre a todas las partes involucradas. En Nueva Zelanda, el Ministerio de Desarrollo Social ha publicado "[Orientación para la Fuerza Laboral de Crisis de Violencia Familiar y Sexual](#)". Este documento proporciona directrices sobre cómo operar - al mismo tiempo que se cumplen las expectativas de salud y seguridad que mantendrán al personal y a los clientes seguros - para la fuerza de trabajo de la violencia familiar y la violencia sexual que apoya a las víctimas durante el Nivel de Alerta 3 de COVID-19.

El Ministerio para el Empoderamiento de la Mujer y la Protección del Niño también elaboró protocolos nacionales para garantizar la seguridad de las denuncias y la ayuda en la búsqueda de violencia contra la mujer, así como la prestación de servicios seguros tanto para las supervivientes como para los proveedores. Si bien el apoyo del UNFPA y ONU-Mujeres ha ayudado a Nueva Zelanda a elaborar otros protocolos para que los proveedores de servicios protejan a los trabajadores migrantes durante la pandemia

Asimismo, [el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño de Indonesia ha elaborado un protocolo nacional](#), para garantizar la seguridad de quienes buscan y denuncian la violencia de género y de quienes prestan servicios de violencia de género. En Indonesia, al igual que en otros lugares, la pandemia ha amplificado la necesidad de esos servicios. Según las estimaciones oficiales del Ministerio para el Empoderamiento de la Mujer y la Protección del Niño, el número de casos de violencia basada en el género aumentó en un 12% durante la pandemia. De hecho, la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer informa de que la violencia doméstica contribuyó a casi dos tercios de los 319 casos de violencia denunciados durante COVID-19.

Los datos de la Fundación de Asistencia Jurídica de la Asociación de Mujeres Indonecias para la Justicia también [se han denunciado hasta 110 casos de violencia doméstica desde que se](#)

⁴ WIEGO, 'Violence and Informal Work', p. 3.

[aplicó el cierre](#) desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio, que es casi la mitad de los casos de violencia doméstica denunciados en todo el año 2019.

La iniciativa de protocolo nacional de Indonesia tiene por objeto [fortalecer los servicios esenciales para las mujeres y los niños que sufren violencia durante COVID-19](#) . Incluye dos áreas de apoyo: 1) Ayudar a elaborar directrices generales y un protocolo para proteger los derechos de las mujeres y los niños en la respuesta y la recuperación de COVID-19, incluida la promoción de la recuperación económica y la capacidad de recuperación, la respuesta a la violencia de género y la lucha contra la estigmatización y la discriminación contra las mujeres de los grupos marginados; y 2) fortalecer la capacidad para prevenir la violencia de género y responder a ella, incluidos los servicios esenciales en el contexto de COVID-19.

Los migrantes suelen quedar excluidos de las actividades gubernamentales de socorro y rehabilitación económica de COVID, debido a su falta de ciudadanía o a la ausencia de documentos de identidad. Lo que constituye una práctica óptima de los protocolos nacionales de Indonesia y Nueva Zelanda es que no sólo abarcan a los proveedores de servicios, sino también a los migrantes, que en muchos casos son trabajadores informales.

Garantizar que los servicios permanezcan abiertos y accesibles

En todo el mundo, COVID ha creado una importante barrera para acceder a los servicios de violencia de género. Una encuesta mundial de UNICEF realizada entre el 1 de mayo y el 14 de agosto de 2020, encontró que [los servicios de prevención de la violencia y de respuesta a la misma se han visto gravemente perturbados en más de 104 países durante el cierre de COVID-19](#). Los servicios incluyen apoyo psicológico, información e intervención jurídica, asesoramiento y remisión a albergues y servicios de protección. Sabemos que el tiempo es crucial con la entrega de estos. Cuanto antes un superviviente pueda acceder a la ayuda, más rápido podrá escapar de una relación abusiva. Cuanto más tiempo permanezca una persona en una relación de este tipo, mayor será el riesgo para su salud y su vida.

Es necesario que los servicios de violencia de género sigan funcionando y sean accesibles durante una pandemia, y también es necesario que se permita a quienes soliciten esos servicios salir de sus hogares y viajar para acceder a ellos, incluso bajo estrictas restricciones de cierre. Esto significa reconocer los servicios de violencia de género como servicios esenciales, así como adaptar y fortalecer los canales de apoyo existentes. En Nueva Zelanda, una importante respuesta del Gobierno fue declarar que los organismos públicos y las organizaciones de apoyo a los supervivientes de la violencia familiar y sexual eran servicios esenciales que seguirían contando con personal durante COVID-19 para apoyar a toda persona que experimentara violencia. Asimismo, en Albania, se destacaron explícitamente como servicio esencial los refugios que acogen a los supervivientes de la violencia doméstica.

En Sudáfrica, los centros de atención de Thuthuzela dedicados, [que proporcionan un servicio de ventanilla única para las víctimas de violencia sexual en los hospitales estatales han permanecido abiertos durante el cierre](#) .

En la provincia de Cabo Oriental, se aceleró la prestación de servicios a nivel comunitario para los supervivientes de la violencia de género, centrándose especialmente en las mujeres de la economía informal, así como en las jóvenes y las mujeres afectadas por el VIH y el SIDA, mediante la prestación de apoyo adicional⁵.

Algunos países, como Botswana y Bulgaria, han mantenido abiertos sus tribunales para casos urgentes, como los de violencia doméstica, mientras que otros, como [Bangladesh y la República Dominicana adoptaron audiencias virtuales](#).

En los casos en que las instituciones oficiales podrían ser menos accesibles, se han establecido puntos de apoyo informales de base local. Francia, por ejemplo, ha abierto centros de asesoramiento y ha designado farmacias como lugares seguros en los que las víctimas de la violencia en el hogar pueden denunciar su situación. En España, las autoridades locales de muchas comunidades autónomas han establecido, en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos, [una iniciativa que permite a las víctimas de malos tratos en el hogar ir a su farmacia y solicitar una "Máscara 19"](#). Esta es una palabra clave que hará que el farmacéutico se ponga en contacto con las autoridades. [Una medida similar se ha aplicado en las farmacias de la Argentina](#), donde la palabra clave es "barbijo rojo" (máscara roja).

En otros contextos en los que los sobrevivientes no pueden salir de casa, las plataformas suplementarias para denunciar los abusos y buscar asesoramiento pueden ser un salvavidas crucial. En Sudáfrica, los esfuerzos proactivos de los servicios de policía, los departamentos gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil para prestar apoyo a las víctimas de malos tratos en el hogar durante el encierro han incluido la creación de plataformas en línea y [servicios telefónicos adicionales de presentación de informes y asesoramiento, incluida una línea telefónica nacional de atención a la violencia de género](#). Países como Australia, Argentina, Chile, Líbano y Portugal, [han fortalecido los canales existentes, incluidos los teléfonos de ayuda, los mensajes de texto y los chats en línea](#).

Sin embargo, la gran mayoría de los mecanismos y servicios descritos anteriormente siguen estando orientados a la violencia doméstica en el hogar. Siguen siendo pocos los canales para denunciar y buscar reparación jurídica, psicológica o sanitaria de las diversas formas de violencia que las personas trabajadoras de la economía informal experimentan en el lugar de trabajo, y que se han visto exacerbadas por las condiciones de COVID. Esos trabajadores suelen carecer de acceso a los mecanismos de denuncia y recurso previstos por el Estado y no tienen los medios financieros para buscar recursos jurídicos, ni pueden permitirse pagar los honorarios de los abogados o pasar tiempo fuera del trabajo en procedimientos judiciales.⁶ Esta sigue siendo una brecha flagrante en las respuestas del gobierno y del sector privado.

Compromisos presupuestarios

Cualquiera que sea el ángulo político que un país elija para abordar la violencia de género, los recursos son siempre esenciales. El compromiso con este problema debe reflejarse en las

⁵ U.N. Women, '[COVID-19 and ending violence against women and girls](#)', p. 6.

⁶ WIEGO, 'Violence and Informal Work', p. 7.

asignaciones presupuestarias, especialmente las asignaciones presupuestarias realizadas en el período de bloqueo. En Nueva Zelanda, por ejemplo, los servicios de atención a la violencia doméstica y sexual recibieron más de 200 millones de dólares neozelandeses (US\$140 millones) en el presupuesto de 2020, para responder al aumento de las tasas de violencia durante el Covid-19. Una respuesta holística requiere intervenciones dedicadas a detener el ciclo de la violencia centrándose en la rehabilitación de los autores. A tal efecto, el Gobierno de Nueva Zelanda ha asignado 16 millones de dólares neozelandeses (US\$11,2 millones de dólares) a los servicios de rehabilitación. En el caso de Indonesia, el Gobierno ha podido obtener los recursos que tanto necesitaba mediante la puesta en marcha de iniciativas conjuntas para hacer frente a la violencia de género en colaboración con ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP).

Promoción de la recuperación económica y la capacidad de recuperación

Si bien los derechos humanos deben estar siempre en primer plano en la lucha contra la violencia de género, es importante recordar que gran parte de la vulnerabilidad de las mujeres tiene sus raíces en su marginación económica y su explotación. Este es especialmente el caso de las mujeres que trabajan en la economía informal. Las mujeres constituyen la mayoría de las personas empleadas en el sector informal, que ha sido el más afectado por la pandemia. Las personas trabajadoras del sector informal no tienen seguridad laboral, no disfrutan de la protección de la legislación laboral y no pueden acceder al crédito. Esto refuerza su dependencia económica de los hombres, que las mantienen atrapadas en relaciones abusivas. Lo que esto significa en el contexto de COVID es que los gobiernos necesitan hacer que las iniciativas de prevención de la violencia de género sean parte integral de los programas económicos y de salud que se ocupan de COVID-19, subraya el Dr. Matshidiso Moeti, Director Regional de la OMS para África.⁷

También significa que los programas gubernamentales de socorro y recuperación de COVID deben abordar seriamente las necesidades de las mujeres como trabajadoras: desde garantizar espacios de trabajo seguros y una mejor infraestructura urbana, guarderías subvencionadas y seguro de desempleo hasta el desarrollo de aptitudes y el acceso al crédito. Esto es algo que el protocolo nacional de Indonesia ha tratado de hacer al centrarse en la promoción de la recuperación económica y la resiliencia como un componente del fortalecimiento de la capacidad para prevenir y responder a la violencia de género. También es evidente en el Plan Estratégico Nacional de Sudáfrica sobre la violencia de género y el femicidio 2020-2030, en el que el poder económico constituye uno de los pilares fundamentales del plan. En la sección 5.2. del quinto pilar del plan se pide, en particular, "Lugares de trabajo seguros y libres de violencia contra las mujeres y las personas LGBTQIA+, incluido, entre otras cosas, el acoso sexual". Sin embargo, Sudáfrica, al igual que Indonesia y Nueva Zelanda, aún no ha demostrado este compromiso al ratificar el Convenio (núm. 190) y la Recomendación (núm. 206) de la OIT sobre la violencia y el acoso, en los que se pide un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por motivos de género, sobre la base de que

⁷ Paul Adepoju 'Gender-Based Violence – The "Shadow Pandemic" Of COVID-19' 26 de Junio de 2020, Health Policy Watch, <https://healthpolicy-watch.news/75409-2/>

constituye un abuso de los derechos humanos, una amenaza para la igualdad de oportunidades y es inaceptable e incompatible con el trabajo decente.⁸ Sin la ratificación, los compromisos asumidos en los planes nacionales de Sudáfrica e Indonesia siguen siendo promesas abstractas incumplidas.

Sobre el terreno también hay otras medidas prácticas que los gobiernos y el sector privado pueden adoptar para prevenir la violencia contra la mujer en el lugar de trabajo, y contra las mujeres que trabajan en la economía informal en particular. Entre ellas figuran: legalizar el comercio ambulante y aplicar sistemas transparentes de concesión de licencias a los vendedores para protegerlos del acoso de la policía y el municipio, mejorar la infraestructura urbana, establecer procedimientos de control fronterizo que tengan en cuenta las cuestiones de género y ofrecer capacitación para hacer frente a las múltiples formas de violencia a que se enfrentan las mujeres que comercian a través de las fronteras, y someter a las personas trabajadoras del sector informal a la legislación laboral vigente o promulgar nuevas leyes encaminadas a protegerlos contra la violencia en el trabajo.

Otras respuestas a la violencia de género en todo el mundo

Se adoptaron varias medidas en diferentes países para hacer frente a las limitaciones que la pandemia trajo consigo al tratar los casos de violencia de género. En el Uruguay, el Gobierno ha [revisado protocolos para permitir a los trabajadores de la salud detectar casos de violencia doméstica](#).

Los programas de subvenciones en efectivo en diferentes partes del mundo han tenido en cuenta la cuestión de la violencia. En Colombia, uno de los requisitos para tener derecho a uno de los programas de apoyo a los ingresos en respuesta a las crisis del Covid-19 era no haber denunciado la violencia doméstica. Desde otro ángulo, en Malta, [el Gobierno amplió el Plan de prestaciones para el alquiler de viviendas a los supervivientes de la violencia](#).

COVID 19: StreetNet International y WIEGO compromisos y actualizaciones

- El Podcast de Economía Informal de WIEGO publicado este mes es sobre el tema de la violencia de género. Dividido en dos partes, el programa presentó [Sonia George, de la Self-Employed Women's Association \(SEWA\), en la parte 1](#), y [Oksana Abboud, coordinadora internacional de StreetNet International, en la parte 2](#).
- WIEGO Briefing Note "Violence and Informal Work", disponible en dos lenguas, [Inglés](#) y [Español](#).

⁸ Fiji, Namibia y Uruguay son los únicos países que hasta la fecha han ratificado la recomendación que entrará en vigor en junio de 2021.

SOBRE WIEGO

Mujeres en el Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO) es una red mundial centrada en asegurar los medios de vida de los trabajadores pobres, especialmente las mujeres, en la economía informal. Creemos que todos los trabajadores deben tener las mismas oportunidades y derechos económicos. WIEGO crea el cambio creando capacidad entre las organizaciones de personas trabajadoras del sector informal, ampliando la base de conocimientos sobre la economía informal e influyendo en las políticas locales, nacionales e internacionales. Visita <http://espanol.wiego.org/> .